



# Asamblea General

Distr. general  
26 de enero de 2010  
Español  
Original: inglés

**Sexagésimo cuarto período de sesiones**  
Tema 132 del programa  
**Proyecto de presupuesto por programas**  
**para el bienio 2010-2011**

## **Condiciones de servicio de los magistrados ad litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda**

### **Informe del Secretario General**

#### **I. Introducción**

1. La Asamblea General, en el párrafo 8 de su resolución 63/259, de 24 de diciembre de 2008, decidió que examinaría en su sexagésimo quinto período de sesiones los emolumentos, las pensiones y las demás condiciones de servicio de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en particular las opciones relativas a planes de pensiones con prestaciones y aportaciones bien definidas.

2. En una carta de fecha 23 de octubre de 2009, el Presidente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda pidió al Secretario General que señalara urgentemente a la atención de la Asamblea General las desigualdades en las condiciones de servicio entre los magistrados permanentes y los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, para que la Asamblea adoptara las medidas y las decisiones oportunas. En su carta, el Presidente del Tribunal observó que el Consejo de Seguridad, en virtud de la resolución 1431 (2002), había establecido un cuerpo de magistrados ad litem para que el Tribunal pudiera concluir su labor lo antes posible. En aquel momento, se daba por sentado que los magistrados ad litem desempeñarían su cargo por un período de tiempo limitado, noción que quedó plasmada en el párrafo 2 del artículo 12 ter del estatuto del Tribunal, en el que se dispone que los magistrados ad litem podrán ser designados “para prestar servicios en las Salas de Primera Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres años, pero que no podrá incluir ningún período de tres años consecutivos”. La limitación del período acumulativo de servicio hacía que los magistrados ad litem no tuvieran derecho a pensiones ya que, de conformidad con el apartado a) del artículo 1 del anexo III de la resolución 58/264 de la Asamblea, de



23 de diciembre de 2003, los magistrados del Tribunal tienen derecho a una pensión de jubilación a condición de que hayan desempeñado su cargo por lo menos durante tres años. Al término del año 2010, cuando concluyan las causas de los magistrados ad litem, la mayoría de ellos habrán desempeñado su cargo durante más de tres años. El Presidente del Tribunal señaló que ello se debía a que se había seguido la política de dar prioridad a la continuidad en el cargo de los magistrados ad litem con el fin de lograr los objetivos de la estrategia de conclusión del Tribunal.

3. En su carta, el Presidente del Tribunal observó también que el Consejo de Seguridad había reconocido en diversas resoluciones, entre ellas las resoluciones 1705 (2006), 1717 (2006) y 1878 (2009), la necesidad de que los magistrados ad litem prestaran servicios después del período acumulativo de servicio previsto y había permitido que lo hicieran para que concluyera cuanto antes la labor del Tribunal. El Presidente del Tribunal observó además que los magistrados ad litem tenían el mismo volumen de trabajo que los magistrados permanentes y que las responsabilidades de unos y otros eran prácticamente las mismas. Por tanto, las persistentes desigualdades en las condiciones de servicio entre los magistrados permanentes y los magistrados ad litem ya no estaban justificadas y debían corregirse en aras de la equidad y de la satisfactoria ejecución de la estrategia de conclusión del Tribunal. A este respecto, el Presidente señaló también que el Consejo de Seguridad, en su resolución 1878 (2009), había observado la preocupación expresada acerca de las condiciones de servicio de los magistrados ad litem pero no había adoptado medidas porque era un asunto que competía a la Asamblea General.

4. En una carta de fecha 22 de diciembre de 2009 dirigida a la Subsecretaria General de Gestión de Recursos Humanos, el Presidente del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia observó que los magistrados ad litem de ese Tribunal habían prestado servicios indispensables para agilizar la labor del Tribunal y, entre otras cosas, habían contribuido a que los acusados tuvieran un juicio justo y rápido y a que se cumplieran los objetivos de la estrategia de conclusión. La prórroga de sus mandatos aprobada por el Consejo de Seguridad en la resolución 1877 (2009) garantizó, asimismo, la continuidad de la labor judicial, que es imprescindible para la rápida conclusión del mandato del Tribunal. El Presidente observó también que el examen por parte de la Asamblea General de las condiciones de servicio de los magistrados ad litem y, en particular, la cuestión de hacer extensivas las prestaciones en materia de pensiones a los magistrados ad litem, sería coherente con la prórroga de sus mandatos aprobada por el Consejo en la resolución 1877 (2009).

5. El presente informe se ha preparado en respuesta a las solicitudes antes expuestas de los Presidentes de ambos Tribunales de que se señalara urgentemente a la atención de la Asamblea General la cuestión de las condiciones de los magistrados ad litem de los dos Tribunales, en particular la de ampliar sus prestaciones en materia de pensiones. Cabe recordar además que la Asamblea, en su resolución 64/239, de 24 de diciembre de 2009, observó que el Secretario General había iniciado el examen de las condiciones de servicio de los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y preveía considerar dicho examen en la primera parte de la continuación de su sexagésimo cuarto período de sesiones.

## II. Nombramiento de magistrados ad litem

6. El Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en su resolución 1329 (2000), de 30 de noviembre de 2000, decidió establecer un cuerpo de magistrados ad litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y aumentar el número de magistrados de las Salas de Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. El Consejo también decidió enmendar los artículos 12, 13 y 14 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y enmendar los artículos 11, 12 y 13 del estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. No se enmendó el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda para incluir una disposición relativa a la utilización de magistrados ad litem.

7. En su resolución 1431 (2002), el Consejo de Seguridad decidió establecer un cuerpo de magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y decidió también enmendar los artículos 11, 12 y 13 del estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y enmendar los artículos 13 bis y 14 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

8. De conformidad con el artículo 13 ter del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados ad litem serán designados por el Secretario General, a petición del Presidente del Tribunal Internacional, para prestar servicio en las Salas de Primera Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres años, pero que no podrá incluir ningún período de tres años consecutivos. El estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda dispone en su artículo 12 ter que los magistrados ad litem serán designados por el Secretario General, a petición del Presidente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, para prestar servicios en las Salas de Primera Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres años, que no podrán ser consecutivos.

9. El apartado a) del párrafo 1) del artículo 13 quáter del estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia dispone que durante el período en el cual hayan sido nombrados para prestar servicios en el Tribunal Internacional, los magistrados ad litem gozarán de las mismas condiciones de servicio mutatis mutandis que los magistrados permanentes del Tribunal Internacional. De conformidad con el apartado a) del párrafo 1) del artículo 12 quáter del estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, los magistrados ad litem gozarán de las mismas condiciones de servicio mutatis mutandis que los magistrados permanentes del Tribunal Internacional. Algunas diferencias, siguiendo este principio de aplicación mutatis mutandis, se basaron en los arreglos iniciales previstos para los magistrados ad litem, vale decir, que prestaran servicio por un período acumulativo de hasta tres años. Tres años de servicios ininterrumpidos es el período mínimo para que los magistrados permanentes puedan tener derecho a recibir una pensión.

10. En diversas resoluciones, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de los magistrados ad litem de ambos Tribunales más allá del período acumulativo de tres años para ayudar a los Tribunales en la aplicación de sus estrategias de conclusión. Como resultado, cuando los Tribunales completen sus juicios, varios magistrados ad litem habrán prestado servicio durante más de tres años consecutivos. Dado que el período de servicio de los magistrados ad litem habrá superado los tres años y habrán asumido las mismas responsabilidades que los magistrados permanentes, ambos Tribunales argumentan que los magistrados ad

litem deberían tener derecho a la misma remuneración, beneficios y prestaciones que los abonados a los magistrados permanentes.

### **III. Información de antecedentes sobre las prestaciones de pensiones de los magistrados de los Tribunales**

11. Por lo que respecta a las prestaciones de pensiones de los magistrados de los Tribunales, cabe recordar que la Asamblea General, en el párrafo 6 de la sección VIII de su resolución 53/214, aprobó los Reglamentos del plan de pensiones de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, respectivamente. La Asamblea aprobó un plan de pensiones para los magistrados de los Tribunales basándose en las recomendaciones que figuraban en el párrafo 29 del informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/53/7/Add.6), en el que la Comisión Consultiva recomendó que las pensiones de los magistrados se basaran en las correspondientes a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, y se prorratearan para tener en cuenta la diferencia en la duración de sus mandatos, es decir, nueve años en el caso de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y cuatro años para los magistrados de ambos Tribunales.

12. En su informe (A/55/806), la Comisión Consultiva señaló que, al contrario que los magistrados de otros tribunales, los servicios de los magistrados ad litem son de carácter mucho más temporal y podrían ser intermitentes. Esta diferencia fundamental se tuvo en cuenta al evaluar la necesidad de las prestaciones y subsidios que se proponían en el informe del Secretario General. La Comisión Consultiva también consideró que, aunque era improbable, podría ocurrir que, en razón de las circunstancias, una causa durara tanto que el magistrado ad litem debiera prestar servicio por más de tres años. Para tener en cuenta esa eventualidad, la carta de nombramiento debería contener una cláusula según la cual, en caso de que eso ocurriera, la consiguiente prolongación del servicio no daría lugar a ningún derecho o prestación adicional a los que ya existieran y que se prorratearían en razón de esa prolongación del período de servicio (A/55/806, párr. 14). La Asamblea General hizo suyo el informe en su resolución 55/249, relativa a los magistrados ad litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y que también se aplica al Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

13. En ocasión de los exámenes amplios de las condiciones de servicio y de las prestaciones del régimen de pensiones de los magistrados realizados en 2001 y 2006, el Secretario General compartió las inquietudes manifestadas por ambos Tribunales, en el sentido de que la disparidad existente entre las prestaciones del régimen de pensiones de los magistrados de los Tribunales y las de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia daba como resultado una discriminación contra los magistrados de los Tribunales que no podía fundamentarse en el estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia ni en el del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Dado que la Asamblea General es la única autoridad que puede determinar las condiciones de servicio y prestaciones del régimen de pensiones de los magistrados de los Tribunales y los magistrados de la Corte, esta cuestión se señaló una vez más a la Asamblea para que la examinara, teniendo en cuenta los argumentos y las propuestas presentados por el Presidente y el Secretario del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Presidente y el Secretario del

Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en oportunidad del examen emprendido en el sexagésimo primer período de sesiones.

14. En el párrafo 10 de su resolución 61/262, la Asamblea General decidió mantener, como medida provisional, las prestaciones de jubilación de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda en el nivel resultante del sueldo base anual decidido en la sección III de su resolución 59/282, y pidió al Secretario General que revisara en consecuencia el párrafo 2 del artículo 1 del Reglamento del plan de pensiones.

15. En el párrafo 11 de su resolución 61/262, la Asamblea General pidió al Secretario General que le presentara un informe en su sexagésimo segundo período de sesiones sobre los posibles planes de pensiones para los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, incluidos planes de prestaciones definidas y de aportaciones definidas, teniendo en cuenta la posibilidad de calcular las pensiones en función del número de años trabajados, en lugar del mandato.

16. En el párrafo 27 de su informe (A/62/538/Add.2 y Corr.1) el Secretario General propuso lo siguiente en relación con las prestaciones de pensiones para los magistrados de los Tribunales:

a) El plan de pensiones de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, respectivamente, deberá seguir siendo un plan de prestaciones definidas;

b) El plan de pensiones deberá seguir siendo un plan en que los afiliados no hacen aportaciones;

c) La prestación de jubilación de los magistrados de los Tribunales deberá seguir estando relacionada con los sueldos, al igual que las pensiones judiciales y de otro tipo, y se la deberá definir como igual al 55% del sueldo base neto anual (excluido el ajuste por lugar de destino) en la hipótesis de que se hubieran cumplido nueve años de servicio;

d) El nivel de la pensión se determinará por referencia a los años de servicio, más que a la duración del mandato;

e) Un magistrado del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que haya sido elegido o prorrogado para un mandato posterior recibirá una prestación de jubilación por cada mes adicional de servicio, por referencia a la razón que en la pensión anual exista entre el número de meses de su servicio y 108 meses;

f) Un magistrado del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que sea o haya de ser reelegido deberá recibir una trescentésima (1/300) parte de su prestación de jubilación por cada mes adicional de servicio, hasta una pensión máxima igual a tres cuartas partes del sueldo base neto anual (excluido el ajuste por lugar de destino);

g) La edad de jubilación seguirá siendo 60 años;

h) El factor de reducción actuarial, a razón de 0,5% por mes, deberá seguir aplicándose a los casos de jubilación anticipada antes de los 60 años de edad;

i) El nivel de la prestación de jubilación deberá ajustarse en ocasión de los aumentos del sueldo base neto anual de los magistrados de los Tribunales;

j) Las pensiones en curso de pago también deberán ajustarse en ocasión de los aumentos del sueldo base neto anual de los magistrados de los Tribunales.

17. En el párrafo 16 de su informe (A/63/570), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto recomendó que se aprobaran las propuestas del Secretario General que figuraban en los incisos a), b), d), e), f), g), h), i) y j) *supra*. En el párrafo 17 de su informe, la Comisión Consultiva indicó que, en consonancia con las recomendaciones sobre la Corte Internacional de Justicia (contenidas en los párrafos 12 y 13 de su informe), recomendaba que la prestación de jubilación de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda se siguiera basando en los sueldos y correspondiera al 50% del sueldo básico neto anual (no incluido el ajuste por lugar de destino), u 85.040 dólares, si esta suma fuera mayor, siempre que se hubiera completado un período de servicio de nueve años. La Comisión Consultiva también recomendó que el magistrado del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que hubiera sido o fuera reelegido recibiera un trescientosavo de su prestación de jubilación respecto de cada mes adicional de servicio más allá de los nueve años, hasta una pensión máxima igual a las dos terceras partes del sueldo básico neto anual (no incluido el ajuste por lugar de destino).

18. En los párrafos 3 y 5 de la sección I de su resolución 63/259 de 24 de diciembre de 2008, la Asamblea General hizo suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Consultiva y pidió al Secretario General que hiciera las revisiones necesarias a los Reglamentos del plan de pensiones de los magistrados de los Tribunales. La Asamblea, en el párrafo 3 de la sección II de su resolución 63/259, también decidió enmendar los Reglamentos de los planes de pensiones de los magistrados de los Tribunales a fin de garantizar que ninguno de los ex magistrados de esos Tribunales percibiera una pensión mientras estuviera en servicio como magistrado de la Corte Penal Internacional.

#### **IV. Consecuencias financieras**

19. Si la Asamblea General decide hacer extensivo el plan de pensiones actualmente aplicable a los magistrados permanentes de los dos Tribunales (que se describe en los párrafos 15 a 17 *supra*) a los magistrados ad litem con más de tres años de servicios continuos, se estima que las consecuencias conexas para el presupuesto ascenderían anualmente a 421.300 dólares para el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y 306.000 dólares para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, basándose en las condiciones actuales de servicio de los magistrados ad litem. Las necesidades adicionales para el bienio 2010-2011 dependerán de las fechas efectivas de finalización de su mandato y los gastos efectivos se abordarán en el contexto de los informes pertinentes de ejecución en el bienio.

## V. Conclusión

20. Las condiciones de servicio aplicables a los magistrados de los Tribunales son establecidas y aprobadas por la Asamblea. La Asamblea General quizá desee hacer extensivo el plan de pensiones de los magistrados permanentes del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda a los magistrados ad litem, teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2010 varios de ellos habrán prestado servicios durante más de tres años consecutivos y efectuado funciones similares.

21. Atendiendo a la petición de la Asamblea General en la resolución 63/259, se presentará a la Asamblea en su sexagésimo quinto período de sesiones un informe amplio sobre los emolumentos, las pensiones y las demás condiciones de servicio de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

---